

XXIV Congreso Nacional de Estudios Electorales  
Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE)

Zacatecas, México, 6-8 de noviembre

Mesa: Partidos Políticos

Título de la ponencia

PRI: Claves sobre su proceso de adaptación organizativa, 1999-2013

Autores:

Dr. Víctor Alarcón Olguín (UAM-Iztapalapa)

alar@xanum.uam.mx

Mtra. Erika Granados Aguilar (UAM-Xochimilco)

granados\_aguilar@yahoo.com.mx

Resumen

El objeto del ensayo será situar la importancia de algunas variables que se consideran centrales para entender el proceso de adaptación y sobrevivencia de PRI durante los años de alternancia y gobiernos del PAN, además de analizar los pasos iniciales que está desarrollando para afianzar una oferta en el contexto de su regreso al poder Ejecutivo. La periodicidad del texto se ubica entonces en los años 1999 – 2013, a efecto de ver los siguientes elementos: a) Grupos y corrientes internas, b) Propuesta ideológica, c) Diseño institucional y d) Métodos de democracia interna y selección de candidatos.

(Texto sólo para discusión No citar sin permiso expreso de los autores)

# El PRI: Claves sobre su proceso de adaptación organizativa, 1999-2013.<sup>1</sup>

Dr. Víctor Alarcón Olguín (UAM-Iztapalapa)

Mtra. Erika Granados Aguilar (UAM-Xochimilco)

## **Introducción: ¿Qué permite el regreso de los partidos tradicionales?**

El objetivo básico de nuestro trabajo es tratar de responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles fueron los factores que permitieron el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de la República en los comicios de 2012? La respuesta a dicha interrogante se establece a partir de una discusión poco desarrollada en la literatura sobre los partidos políticos, como lo es precisamente el estudio de los llamados partidos tradicionales de naturaleza hegemónico-dominante, cuya permanencia es notoria pese a la eventualidad de posibles derrotas que puedan experimentar al peso de su historia.

Autores como Pempel (1991) detectaron en los años noventa la presencia de partidos longevos alrededor de los cuales se construyeron lo que se tendió a llamar como modelos de partidos “diferentes”. Esto es, organizaciones pluri-clasistas e ideológicamente amplias que eran capaces de estructurar un predominio por encima de sus potenciales competidores, a partir de la obtención de triunfos mayoritarios limpios u bien cercanos al empleo de mecanismos clientelares e incluso fraudulentos, pero en cuyo caso no implicaban una posibilidad sustancial de levantamientos u protestas de alcance nacional significativo que pudieran poner en entredicho la continuidad de dicho modelo.

---

<sup>1</sup> El presente texto forma parte de una investigación colectiva desarrollándose en torno al regreso del PRI coordinada por el Dr. Francisco José Paoli Bolio y que involucra a la UAM.Iztapalapa y el IJJ-UNAM.

Sin embargo, otra parte importante de la literatura ha abordado que los problemas de adaptación organizativa de este tipo de partidos han sido por una parte, confrontar los retos de sus tendencias clásicas a la oligarquización o bien observar si éstos han podido trascender y optimizar sus tendencias históricas de ser partidos “atrapa-todo” y son capaces de adaptarse al proceso de estructuras de intercambio y presencia e implantación territorial como lo representan hoy en día los llamados “partidos cártel”. (Rodríguez Alonso, 2011).

Adicionalmente, dentro de la literatura de los partidos dominantes u hegemónicos, se podían hallar una segunda línea de prolongación analítica para observar el papel de dichas organizaciones en el marco de sistemas autoritarios o de “partido único”, en donde además se podía hablar simplemente del papel y transferencia legitimadora del liderazgo político de un candidato a otro, a partir del empleo de factores de herencia familiar. De esta manera, los partidos se manifestaban como simples correas de transmisión y movilización mayoritaria de los arreglos cupulares instrumentadas según el interés y necesidad de los grupos que controlaban dichas estructuras de poder.

En este sentido, la caída de los esquemas autoritarios y democráticos nos han dicho poco acerca sobre los casos de excepción en donde un partido longevo que representaba a un cierto tipo de régimen de democracia limitada u abiertamente autoritario puede ser capaz de retornar al poder mediante el triunfo electoral, a pesar de que inicialmente éstos fueran derrotados o depuestos precisamente merced a la movilización y / o el voto popular. Esto es, conocemos gracias a autores como Greene (2007) algunos de los razonamientos que permiten entender por qué pierden los partidos dominantes, pero paradójicamente no tenemos literalmente ninguna teoría sólida que nos permita definir las causas que hacen factible el retorno electoral de los partidos tradicionales.

En el contexto internacional, puede hablarse de algunos casos dignos de estudio, como lo son el Partido Liberal Democrático de Japón u el Partido Colorado del Paraguay. En este punto es importante distinguir el hecho de que casos como los que se mencionan implican que dichos partidos no transformaron su nombre y se preservaron dentro del nuevo sistema de competencia. Esto los hace diferentes respecto a otro tipo de agrupaciones partidarias

como las que se derivaron de los sistemas ex comunistas de Europa del Este, algunas de las cuales pudieron regresar al poder, pero experimentando alguna modificación respecto a su denominación formal, lo que también implicaba cierto nivel de modificación sustantiva respecto a su identidad y oferta ideológica.

De esta manera, lo que se pretende investigar en el caso del PRI, se refiere precisamente a ubicar cuáles son las claves y decisiones estratégicas que se pueden considerar como cruciales para primero permitir su continuidad dentro del sistema electoral y de partidos, así como ser capaces de mantener un proceso de organización eficiente sobre el cual se pudiera dar su conservación como partido político.

## **II. La salida del PRI y los años de la alternancia, 1999-2012.**

Como ha sido prolijamente estudiado, el descenso electoral y la crisis organizativa del PRI son la consecuencia de un persistente proceso de desgaste e indefinición ideológica al interior de sus grupos y facciones, mismo que tuvo una importante confluencia con la pérdida de capacidad en la conducción del Estado y la crisis económica abierta desde la década de los años ochenta del siglo pasado (Mirón Lince 2011, Contreras 2012). El nacimiento del antagonismo entre el llamado neocardenismo, defensor de los remanentes discursivos del nacionalismo revolucionario (basado en el intervencionismo estatal y un modelo benefactor en los campos de la política social) y el neoliberalismo privatizador, promovido a partir de la administración de Miguel de la Madrid, hicieron que el PRI comenzará a sufrir un conjunto de rupturas internas que no sólo se expresarían con los resultados de los polémicos comicios de 1988, sino también con la salida continua de diversos grupos y liderazgos, mismos que dieron paso a la creación de diversos partidos que obtuvieron su registro para competir en elecciones, como precisamente lo constituyeron el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Centro Democrático (PCD, liderado por Manuel Camacho y Marcelo Ebrard), Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), cuya cabeza histórica ha sido Dante Delgado), el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN, encabezado por familiares de la viuda de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial priísta asesinado), el Partido Liberal Mexicano (PLM, encabezado

por el sector de la masonería liberal que había tenido un papel tradicional en el PRI), Fuerza Ciudadana (FC, resultado de algunas escisiones provenientes de los sectores popular y campesino del PRI) y muy particularmente el caso de Nueva Alianza, cuyo origen se derivó del alejamiento y expulsión realizada a la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, misma que había comenzado a desarrollar una política de negociaciones y apoyos a las políticas desarrolladas por los gobiernos panistas y las cuales incluso implicaron apoyarlas mediante votos en el Congreso y en procesos de elección a gobernador..

Como puede observarse, el PRI acumuló un conjunto de rezagos y contradicciones que adicionalmente se manifestaron en resultados muy ambiguos en lo concerniente al campo de su democracia interna y el proceso de selección de sus candidatos. En este terreno, cabe recordar, el PRI presionado desde arriba por el entonces presidente Ernesto Zedillo desarrolló en 1999 un primer proceso de elección abierta para designar a su candidato presidencial, en el cual participaron 4 precandidatos: Manuel Bartlett Díaz, Humberto Roque Villanueva, Roberto Madrazo Pintado y Francisco Labastida Ochoa, quienes se disputarían la nominación a partir de un sistema donde el ganador sería aquél que triunfara en el mayor número de los 300 distritos electorales en que se dividía el país. Esto es, no ganaría necesariamente el que tuviera el mayor número de votos. Dicho esquema dio como ganador a Labastida, pero indudablemente no había un consenso interno que permitiera ir a la contienda posterior frente a la oposición, lo que a la postre permitió el triunfo del PAN y su candidato Vicente Fox.

El reconocimiento de la derrota ante el PAN, hizo que por vez primera en su historia, el PRI tuviera que visualizar un procesos de adaptación organizativa. Sin el ejercicio directo de la presidencia, el dilema era encontrar un arreglo institucional que efectivamente mantuviera cohesionada a su militancia y evitar así su desaparición. Los reclamos de una militancia que condenaba las malas decisiones de las administraciones tecnocráticas hicieron que salieran a la palestra actores anteriormente minimizados dentro de la vida partidaria, como lo eran los gobernadores.

Dotados de importantes recursos, los gobernadores comenzaron a tener una voz central en los plenos del Consejo Político Nacional y demandaron abrir más el partido para promover su plena transformación y adaptación a las nuevas condiciones de ser oposición. En buena medida, la debacle electoral priísta se encontraba amortiguada gracias precisamente a las reglas institucionales que le procuraban seguir siendo la segunda fuerza parlamentaria en ambas cámaras, lo cual le permitía entonces mantener una capacidad de negociación y veto respecto al PAN. Al mismo tiempo, el proceso de reorganización y ajuste internos propiciaría que los gobernadores promovieran en el año 2002 por vez primera una elección abierta entre los militantes para elegir a su presidente nacional, la cual recayó finalmente en el entonces líder del llamado sector tradicionalista como lo sería Roberto Madrazo Pintado, quien obtendría dicha posición llevando como Secretaría General y aliada táctica a Elba Esther Gordillo. Con esta nueva ecuación de poder, los gobernadores de los estados hegemónicos (es decir, donde el PRI aún no había perdido una elección local) decidieron que era pertinente blindar el paso de la oposición y resistir a la transición en sus respectivos estados, así como comenzar a reflexionar en la construcción de un bloque político que tuviera capacidades de interlocución con el gobierno federal, lo que daría precisamente paso a la integración de lo que posteriormente sería conocida como la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). (Pacheco, 2013)

Sin embargo, dicho esquema coalicional no encontraría una respuesta adecuada en Roberto Madrazo, quien estima que el PRI debería mantenerse cohesionado y dirigido desde la propia presidencia del partido, lo cual comienza a desatar una nueva guerra por el control interno de la organización. La situación es paradójica, debido a que pese a los resultados electorales exitosos que permiten un regreso parcial como fuerza dominante en el Congreso federal y triunfos varios en las entidades federativas, la interlocución interna iba de mal en peor, la cual se produce por la ruptura directa en 2003 entre Madrazo y Gordillo, que terminan con la separación y expulsión formal de ésta última. Con ello, los gobernadores afines a Gordillo abiertamente buscarán construir una candidatura que los identifique para competir por la presidencia en el 2006, organizándose entonces alrededor del TUCOM (Todos Unidos contra Madrazo).

De igual manera, las Asambleas Nacionales del partido celebradas en el periodo responderían a este nuevo campo de conflicto, si bien Roberto Madrazo terminaría por imponerse al TUCOM, en tanto logra forzar la renuncia de su candidato consensado, el gobernador mexiquense Arturo Montiel, quien decide declinar ante la eventualidad de verse involucrado en un escándalo de corrupción. De esta manera, Madrazo va a un proceso de elección interna controlado y donde se inscribe un solo adversario, Everardo Moreno, a quien termina venciendo con toda facilidad en la jornada electoral.

Sin embargo, los comicios del 2006 hacen que el PRI llegue en condiciones políticas precarias y se genera entonces la formación del partido Nueva Alianza y el que Elba Ester Gordillo termine pactando una alianza estratégica con el PAN, misma que le redituará en un conjunto amplio de prebendas. Igualmente, es sintomático hablar aquí que tampoco ningún otro integrante del sindicalismo oficial desplegara una política de oposición abierta al régimen panista, sino que simplemente éstos se adaptaran al proceso de negociación con el empresariado, si bien se presentaron intentos de reforma a la legislación laboral o de privatización que fueron acotados justamente gracias a la habilidad e intermediación de dichos liderazgos.

Con la salida formal (aunque no real) del grupo gordillista, dicha situación permitió una nueva oportunidad a las aspiraciones de liderazgo de Beatriz Paredes Rangel, cuya presencia era una rara mezcla pragmática de interlocución entre las diversas facciones dispersas, pero especialmente entre las del tradicionalismo nacionalista. Esto le permitió presentarse a la elección de la dirigencia y ganarla pese a la presencia de otras tres fórmulas menores. Sin duda, la experiencia y autoridad de Paredes permitió definir una estrategia más convincente de coexistencia entre los gobernadores, los coordinadores de los grupos parlamentarios del partido en el Congreso federal y la propia presidencia. Los cambios logrados permitieron por fin un modelo donde los diversos grupos podían confluír adecuadamente en el marco del Consejo Político Nacional y delimitaron por fin una estrategia de mediano plazo para consolidar una nueva matriz organizativa, a efecto de poder recuperar el control del Congreso en 2009 y la presidencia en el 2012.

El cambio de imagen abierto por la gestión de Paredes pasaba por una dinámica de comunicación autocrítica –si bien light- respecto a los errores que habían propiciado el alejamiento del PRI respecto de la militancia y la ciudadanía. Se comienza hablar de un “PRI del siglo XXI” y se delimitan entonces esfuerzos por renovar las estructuras seccionales y recuperar el contacto con las organizaciones intermedias, si bien esto no implicaba modificar el diseño clásico de las corporaciones y los sectores. Esto es, se otorgaba a cada uno de los gobernadores y los liderazgos locales flexibilidad en la obtención de dichos fines. Esto daría entonces un impulso muy importante a respetar la idiosincrasia y especificidad de los “modos políticos” vigentes en cada entidad federativa. Pero quizás lo más importante, era percibir que la presidencia del partido no tendría aspiraciones propias para jugar a la presidencia, por lo que las posibles candidaturas podrían salir de otros espacios del Partido, recuperándose así una función de arbitraje que se vería reforzada en el marco del Consejo Político Nacional. (Hernández Rodríguez y Pansters, 2012)

Los resultados fueron claramente evidentes con la recuperación priísta en los comicios intermedios de 2009, los cuales incluso provocaron que el gordillismo y Nueva Alianza no se desprendieran del todo respecto a realizar alianzas político-electorales en aquellas entidades donde el magisterio era una fuerza de movilización sustantiva. Sin embargo, era claro que dicha situación no era muy del agrado del PRI, pero ciertamente era un costo a pagar en el marco de un proceso de recuperación y recomposición entre las facciones internas del partido, las cuales con todo, muchas seguían identificadas alrededor de dos importantes núcleos históricos: los herederos del delamadrismo (Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa) y los del salinismo (quienes curiosamente se habían venido asociando alrededor de la figura del gobernador mezuense Enrique Peña Nieto). (Zamitz, 2013)

La candidatura de Peña Nieto es entonces una combinación muy específica de factores que deben ser revisados con detalle. Por ejemplo, al ser sobrino de Arturo Montiel y tener como capital político propio al llamado Grupo Atlacomulco era evidente que no tendría interés alguno de incorporar a Roberto Madrazo Pintado en su campaña. Por otra parte, y como ello ocurrió, el grupo de Peña Nieto cuidó y guardó muy bien una distancia inicial con el



magisterio (diferenciándolo del resto del movimiento obrero) para evitar que éste apoyara de lleno a las aspiraciones del PAN, creándole expectativas de que podría darse una exoneración formal de Gordillo.

.Por otra parte, Peña Nieto cuidó de manera muy particular la desarticulación de posibles opositores que pudieran surgir desde la CONAGO, convirtiéndola precisamente en su base de acción y discurso. De esta manera, lograría que la integración y reglas de la elección interna se pudieran controlar desde el CPN en donde ya poseía una mayoría muy imórtante de delegados, lo cual haría desistir especialmente a Manlio Fabio Beltrones de aspirar a competir, pese a la apertura de la convocatoria respectiva.

Con un camino allanado, Peña Nieto se dio a la tarea de construir una dinámica de alianzas internas y externas que respetaría las “reglas formales” del partido, sin por ello perder capacidad o incluso poder de veto. Esto es, asimilaría a actores provenientes de las diversas camarillas internas para integrarlos en funciones consultivas durante la campaña electoral, y de manera posterior, dio pauta a un reparto importante de espacios a ex gobernadores (varios de ellos interlocutores suyos en la CONAGO) para ocupar cargos importantes en el gabinete legal y ampliado. Y de igual forma, pudo acomodar piezas importantes en el control partidario (en especial colocando a César Camacho Quiroz) a efecto de no perder capacidad de interlocución con su grupo de origen e incluso atraer a opositores previos.

### **III. La ampliación del círculo de poder. Los primeros pasos.**

Logrado el triunfo presidencial en 2012, el primer año de gestión de Enrique Peña Nieto ha confirmado la intención de hacer gravitar una administración que haga retornar las reglas del presidencialismo clásico en la parte relativa al arbitraje “inter pares”. Esto es, si bien no se desconoce la integración de un poder político diversificado y plural, que incluso ejerce contrapesos desde los órganos del Estado, resulta claro que la nueva presidencia ha tenido que generar algunos golpes de autoridad que permitan fijar las condiciones de dicho orden.

Por una parte, la pluralidad se ha reconocido en la medida que se decidió construir un espacio de negociación como el llamado Pacto por México, con el cual se dio entrada a la participación de los liderazgos partidarios de oposición a efecto de ubicar espacios que permitan la aprobación de reformas estructurales, mismas que incluso comenzaron a promoverse en la parte final de la presidencia de Felipe Calderón. En un segundo momento, la nueva administración presidencial promovió una Asamblea Nacional del PRI en donde el resultado más importante es la “reconexión” formal y estatutaria que permite al Presidente de la República tener un espacio dentro del CPN, lo cual muestra un mensaje de tradicionalismo y control vertical sobre la propia militancia, si bien la interacción con los gobernadores también comienza a regularse en términos ya no de diálogo sino de disciplina.

Pero sin duda, la parte más compleja del entramado político que ha venido siendo tejido por Peña Nieto es la dinámica de negociación e interlocución con los movimientos sociales, en particular con el magisterio. Si bien impulsado por evitar un mecanismo de “imposición” por parte de Elba Esther Gordillo, la decisión de ruptura y encarcelamiento de la líder fue notoriamente aplaudida, es claro que no contempló desarrollar un proceso de “neutralización” de sus opositores, lo cual ha desatado un proceso de rebelión que ha terminado por desbordarse y generar un conflicto de alcance nacional, particularmente a partir del proceso unilateral de aprobación de una reforma profunda al sector educativo.

Intentando capitalizar el impulso inicial de su triunfo en las urnas, la administración de Peña Nieto también intentó consolidar una base electoral importante en los comicios estatales desarrollados en 2013, aunque éstos estuvieron contaminados por los resabios de las acusaciones de fraude y compra de votos de la elección presidencial pasada, y a las cuales se sumaron las acciones de intervención directa de las autoridades locales observadas especialmente en los estados del PRI que estaban en juego, y que han llevado a la exigencia de una “centralización y nacionalización” de los órganos electorales, lo cual es una paradójica solución que contradice todo el esfuerzo desarrollado desde los años noventa del siglo pasado para evitar la concentración del poder en una sola instancia.

El agotamiento de la capacidad de reformas muestra a EPN que las condiciones de negociación con interlocutores con agendas muy diversas como lo expresan los coordinadores de los grupos parlamentarios y los diversos grupos sociales es una pista de aprendizaje compleja, si bien hay que admitir que posee un segmento de operadores políticos y técnicos que aprende rápido y que hasta ahora se han podido abrir camino hacia ambos lados del espectro político, cuestión nada fácil pero que resulta importante no dejar de mencionar, especialmente en el contexto del conjunto de reformas económicas y fiscales, que junto con las de tipo laboral y energética, son la columna vertebral de su proyecto. Sin embargo, resulta claro que se necesitará un conjunto de negociaciones más amplio si se desea especialmente que el PRI sea un actor más proclive y capaz de promover dichos cambios en el marco legislativo, pero sobre tratar de ganar una base discursiva de debate de cara a las elecciones del 2015. .

### **Conclusión provisional.**

La relación gobierno-partido (party-government) es uno de los temas clásicos dentro de la literatura sobre los partidos tradicionales y dominantes, particularmente en contextos autoritarios y post-transicionales. La construcción del retorno de dicho tipo de partidos reta particularmente a la imaginación analítica debido a que dicho regreso se cimenta particularmente en los supuestos de la decepción causada por la impericia de los “demócratas” que no pudieron asumir la responsabilidad del gobierno, lo cual facilita en su caso, a la búsqueda de lo conocido y que bajo el argumento de la experiencia y de que ellos si saben gobernar, terminan convenciendo de la política al estilo de “business as usual” es preferible a no tener nada.

Los años del PAN no pudieron erradicar los índices de desempleo e inseguridad, si bien se pueda acreditar avances importantes en materia de libertad de expresión, apertura política y participación de la sociedad civil en los procesos legislativos o en la creación de organismos autónomos. Sin embargo, quedaron pendientes reformas estructurales necesarias que pudieran ofrecer una alternativa de fondo al modelo económico en que se sigue debatiendo nuestro país. El reto inicial que encuentran el PRI y la presidencia de Peña

Nieto por ende no es menor, y ciertamente poseen poco tiempo y espacios para intentar concretarlos.

El riesgo ante un contexto con fuertes inercias y resistencias al cambio, sea caer una vez más en la pérdida del entusiasmo y que el PRI y Peña Nieto sólo “administren” conteniendo las protestas y aprobando en todo caso, pequeñas reformas. O peor aún, que se tenga la percepción de que los cambios necesitan acciones de fuerza a efecto de avanzar y desplazar a los actores que obstruyen dicho proceso de reformas, sin mediar una adecuada contextualización o preparación de dichas reformas, generando entonces un mayor clima de conflicto y confrontación en un país ya de por sí atosigado por la falta de seguridad y violencia social

Como puede verse, el reto no es menor y no se reduce solo a ganar o perder elecciones, si bien éstas son un importante punto de legitimidad que no debe ser desdeñado. De ahí la importancia que partidos como el PRI sean capaces de modernizarse y ser factores reales para el procesamiento y discusión de las reformas y la hechura de las políticas que se requieren en estos momentos.

## **Bibliografía**

-Contreras Manrique, Julio César (2012): Organizaciones de partido político. Estructura y acción concreta en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), San Luis Potosí, El Colegio de San Luis.

-Greene, Kenneth F. (2007): Why dominant parties lose. Mexico's democratization in comparative perspective. Cambridge, Cambridge University Press.

-Hernández Rodríguez, Regelio y Pansters, Wil G. (2012): “La democracia en México y el retorno del PRI”, Foro Internacional, 210, oct-dic, pp. 755-795

-Mirón Lince, Rosa María (2011). El PRI y la transición política en México, México, Gernika.

-Pacheco Méndez, Guadalupe (2013): “La elección de dirigentes nacionales del PRI, 2000.2007”, en Estudios Políticos, no.30, sept-dic., pp.131-162.

-Pempel. T.J. (1991): Democracias diferentes. Los regímenes con un partido dominante. México, FCE.

-Rodríguez Alonso, Jesús Alberto (2011): Entre el cártel y la democracia. Los partidos políticos en México. Ciudad Juárez, UACJ,

-Zamitiz Gamboa, Héctor (2013): “Una interpretación sobre las tendencias recientes de dirección y control de la oligarquía en el PRI”, en Francisco Casanova Álvarez y Gabriel Corona Armenta (coords.): Democracia interna y tendencias oligárquicas de los partidos políticos en México: PAN, PRI y PRD. México, UNAM/ FES-Acatlán y Gernika, pp. 153-194.